

La regeneración política y la financiación exigen un gran pacto valenciano

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La conformación del nuevo mapa político de nuestra Comunitat, tras las elecciones del 24 de mayo, es una clara consecuencia de la reacción de la ciudadanía ante los Partidos Políticos clásicos, instaurados en el inmovilismo y la corrupción consentida o cuanto menos no atajada de raíz.

Todos ellos, incluso los de reciente aparición que proyectan una imagen antisistema (aunque gran parte de sus miembros provenientes de la Administración, Universidad, Judicatura, etcétera ya están percibiendo sueldo público) han empujado a la Democracia y tergiversado el papel que les asigna la Constitución, que les otorga –pero no en exclusividad– el papel y cauce de la voluntad popular y de su participación en política.

El que la Democracia no pueda entenderse sin Partidos Políticos que aglutinan las corrientes ideológicas e intereses varios de los ciudadanos no merece mayor explicación; es una obviedad. Sin embargo, en estas últimas décadas en España, alternativamente bipartidista (PP y PSOE), ayudados a costa de grandes dispendios por ‘partidos bisagra’ nacionalistas e independentistas (CiU y PNV), no sólo han colonizado las instituciones políticas y judiciales (Administración Pública, Consejo del Poder Judicial, tribunales de Cuentas y Constitucional...) sino que han intentado dominar –y lo han conseguido– enteramente la vida económica, social, universitaria y financiera del país (organizaciones empresariales y sindicales contaminadas a través de subvenciones; estamentos universitarios y estudiantiles politizados y endogámicos; cajas de ahorros... quebradas por sus gestores políticos, etcétera).

A todo ello hay que añadir la falta de democracia interna de los partidos, dominados años y años por una élite inmovilista que no ha hecho apenas nada para seleccionar a sus representantes en las instituciones, donde debería haber primado su formación, dedicación y honestidad. Es esencial ya sustituir a los profesionales de la política (de profesión político) por profesionales ‘en’ la política, y alejar por siempre a los indocumentados, a los holgazanes e indolentes pero ‘aduladores’ y a los inmorales/corruptos. Hay que evitar que cualquiera sin mérito mínimamente reconocido pueda ocupar un lugar elegible en una lista electoral cerrada, bloqueada y aprobada por una dirección cada vez más empobrecida por su carácter endogámico y su cortedad de miras.

Son muchos los valencianos y los medios de comunicación que ante las pasadas elecciones tomaron la palabra e influyeron a sus lectores, familiares, compañeros de trabajo, afines, en organizaciones cívicas, profesionales, etcétera para que ejercieran su derecho al voto, convencidos de contribuir –ahora sí– a la regeneración de la política. Otros muchos optaron por la abstención, desconfiando

de que la ansiada regeneración partiera de los órganos directivos, y prefirieron una catarsis.

Los resultados obtenidos y la conformación de pactos y coaliciones para alcanzar gobiernos municipales y/o autonómicos en unos ciudadanos ha provocado alegría desmedida y en otros decepción, incluso reacciones desfavorables. Situación lógica, tras varios lustros de mayorías absolutas del PPCV... y ante un cambio de ciclo con otros protagonistas.

El nuevo gobierno de la Generalitat, presidido por Ximo Puig (PSPV), y con Mónica Oltra (Compromís) de vicepresidenta-portavoz, ya ha sido convocado, en los pasados días, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidido por Montoro, en donde se nos revisa el déficit 2015 –que claramente incumplimos–; se nos pide una previsión de ingresos y gastos para los PGV 2016, marcándonos un déficit máximo del -0,7% (de imposible cumplimiento); nos sacan «una vez más» la tarjeta roja por la deuda de 37.000 millones de euros, que en un 68% ya está en manos del Ministerio de Hacienda... En fin, nos encontramos con el conocido Montoro –«consejos doy que yo no cumplo»–.

Ante esta situación de incumplimiento de la

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de abril de 2012, y la negativa de Rajoy & Montoro a renegociar el sistema de financiación autonómica (cuyo actual modelo venció en diciembre de 2014), se impone un gran pacto valenciano por la mejora de la financiación y equipamiento de Infraestructuras productivas. Pacto que, desde Les Corts Valencianes, presididas por Enric Morera i Catalá (Bloc), deberían suscribir todos los Partidos Políticos del arco parlamentario valenciano.

No entendería el ciudadano que el PPCV, ahora en la oposición, no lo suscribiera, aduciendo por ejemplo que el vigente sistema de financiación de 2009 proviene del PSOE...

..., cuando hay que recordar que descansa en el anterior modelo de 2001, aprobado por el Gobierno de Aznar, donde Montoro ya era ministro de Economía y Hacienda. Sistemas, tanto el de 2001 como el de 2009, que siempre nos han marginado.

En cuanto al empresariado valenciano, con necesidad de ganar masa crítica, liderar la exportación, potenciar su industria y cuyo mayor empeño es crear riqueza, generar rentas e incrementar el empleo, necesita de una permanente mejora de sus infraestructuras de transporte, logística y plataformas portuarias intermodales. Decálogo de infraestructuras, ferroviarias, viarias e hidráulicas, solicitadas por el empresariado a Fomento y Hacienda que ya Ximo Puig, asumiéndolo, planteó como PNL al Gobierno de Rajoy en julio de 2014 y que hoy no tiene sino que ‘fotocopiarlo’, pues prácticamente nada se ha cumplido, y que entiendo que el PPCV no tendrá inconveniente en apoyar y que se recoja en los próximos PGE 2016.



:: D.T.